



Proceso	Ejecutivo Singular
Demandante	José Miguel Espinal Acevedo
Demandado	Oscar de Jesús Cano Ortiz
Radicado	05001 22 03 000 2023 00333 00
Procedencia	Juzgado 15 Civil Municipal de Medellín
Interlocutorio	No. 120
Asunto	Conflicto de competencia
Tema	La competencia en principio se determina por el domicilio del demandado, pero tratándose de procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, también es competente a elección del demandante el juez del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Competencia a prevención.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés

I. OBJETO

Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre el **JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES - ITAGÜÍ** y el **JUZGADO QUINCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN,**

en el proceso ejecutivo adelantado por **JOSÉ MIGUEL ESPINAL ACEVEDO** en contra de **OSCAR DE JESÚS CANO ORTIZ**.

II. ANTECEDENTES

Hechos, actuaciones y proposición del conflicto. El señor José Miguel Espinal Acevedo, presentó demanda ejecutiva en contra del señor Oscar de Jesús Cano Ortiz, para que se libre mandamiento de pago a favor del primero y cargo del segundo por las sumas dejadas de pagar por concepto de canon de arrendamiento, a razón de \$1.250.000, por los periodos comprendidos entre el 01 de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023, más los intereses máximos de mora a partir del 01 de marzo de 2023 y las costas procesales.

Por reparto la demanda correspondió al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Itagüí, quien, por auto del 30 de mayo de 2023, declaró la falta de competencia para asumir su conocimiento, argumentando que *"Estudiada la demanda, se constata que la dirección del domicilio del demandado que aporta la parte demandante es la Carrera 16 # 6-27 int 101, de la ciudad de Medellín - Antioquia, por lo que se concluye, sin lugar a equívocos que es evidente la carencia de competencia territorial, en virtud de lo establecido en el artículo 28 del Código General del Proceso que a la letra señala: (...) 1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado..."* (Subrayas propias del texto), razón por la cual remitió el asunto a los jueces civiles municipales de Medellín.

Asignado el proceso al Juzgado Quince Civil Municipal de Medellín (Ant.), por auto del 27 de junio del presente año, consideró que no tiene competencia para asumir su conocimiento porque el escrito de demanda indica que va *"dirigida expresamente al juzgado Civil Municipal de Itagüí (Reparto), aunado a lo manifestado en el acápite de cuantía y competencia de la demanda donde es muy claro al indicar lo siguiente "Es usted competente, señor Juez, dado que el presente proceso se **involucra un título ejecutivo representado en un contrato de arrendamiento (Numeral 3 del art. 28 del C.G.P)** y por la cuantía del proceso ya que no sobrepasa los cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv)" (...)* en el título ejecutivo representado en un contrato de arrendamiento se desprende que el inmueble se encuentra **ubicado en la Calle 85 No. 48-01 Bloque Naranja (24) de la Central Mayorista de Antioquia, del Municipio de Itagüí**, lo que nos lleva a inferir que, también es competente el juez del lugar de cumplimiento de la obligación, tal como lo quiso la parte demandante y según la norma descrita anteriormente, es decir, Art. 28 numeral 3 del C.G. del P. (...) el factor de competencia que tuvo en cuenta el demandante para atribuir a ese juzgador el conocimiento del presente asunto, donde dice que es usted señor Juez competente para conocer de este proceso, toda vez que, fue en el Municipio de Itagüí donde se originó la obligación y por parto es el lugar de cumplimiento".

III. CONSIDERACIONES

El conflicto negativo de competencia: El conflicto negativo de competencia se origina, cuando dos Despachos Judiciales respectivamente reniegan de la misma, uno de los cuales virtualmente está llamado a conocer del asunto, por la aplicación de los diferentes fueros que existen para su determinación (art. 139 del C. General del Proceso).

Determinación de la competencia: El art. 28 del C. General del Proceso, establece los parámetros para determinar la competencia por el factor territorial; al efecto, el numeral 1º consagra que, en los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado y, el numeral 3º estipula que *"En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita."*

Frente a este tema la doctrina nacional ha señalado:

"11. FUERO CONTRACTUAL

"Conserva vigencia en su modalidad de tácito –denominado también destinatae solutiones-, esto es, cuando en el documento contentivo de la relación jurídica objeto del

proceso se indica el lugar donde el deudor debe cumplir la obligación. No obra de manera exclusiva, sino en concurrencia con el personal; es decir, que el demandante puede escoger entre demandar en el lugar de domicilio del demandado o en el indicado en el documento para cumplir con la obligación. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tiene por no escrita, esto es, como si no existiera.

"Aunque, en principio, puede pensarse que esta clase de fuero se refiere exclusivamente a los procesos ejecutivos, que entrañan el cumplimiento de una obligación, también obra en los declarativos, pero su ocurrencia, desde luego, es mucho menor. De los primeros pueden citarse, como ejemplos, el cobro de los títulos valores y la ejecución mixta, llamada así por perseguir el bien afecto al gravamen hipotecario o prendario (real) y otros de propiedad del deudor (personal); y de los segundos, el ya mencionado de la rendición de cuentas.

"La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el fuero contractual no obra en los títulos valores y, por ende, el juez competente para conocer de la correspondiente ejecución es el del domicilio del deudor, fundándose en que estos no tienen la calidad de contractuales. Con el respeto que nos merece, nos apartamos de esa tesis, porque el objeto del proceso fue tomar en consideración el lugar señalado para cumplir la obligación, que, precisamente, ocurre en los títulos valores. En consecuencia, si el deudor tiene que cumplir la obligación en determinado lugar, por así acordarlo las partes o, a lo menos, aceptarlos aquel, en esa localidad puede ser demandado.

*"Este criterio queda revaluado con el Código General del Proceso, que en el artículo 28, numeral 1, perentoriamente establece que en los negocios jurídicos o que involucren títulos ejecutivos, entre los cuales, desde luego, se encuentran los títulos valores, la competencia es concurrente entre el domicilio del deudor y el lugar indicado para el cumplimiento de la obligación."*¹

El caso concreto: La demanda ejecutiva refiere al cobro de una obligación contenida en un contrato de arrendamiento – el pago de cánones de arrendamiento; el escrito de demanda expresamente indicó en el acápite de cuantía y competencia, que *"Es usted competente, señor Juez, dado que el presente proceso se (sic) involucra un título ejecutivo representado en un contrato de arrendamiento (Numeral 3 del art. 28 del C.G.P.) y por la cuantía del proceso ya que no sobrepasa los cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) (Art. 25 del C.G.P.)"*; el hecho primero de la demanda afirma que el contrato de arrendamiento versa sobre un *"- Local Comercial (...) un inmueble ubicado en la Calle 85 No. 48-01 Bloque Naranja (24) de la Central Mayorista de Antioquia, **de la ciudad de Itagüí**"* (Negritas intencionales) y, el contrato de arrendamiento da cuenta que se trata del mismo inmueble.

El Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Itagüí, en el auto que declaró la falta de competencia y rechazó la demanda, argumentó que *"la dirección del*

¹ Manual de Derecho Procesal, Tomo II, Parte General, AZULA CAMACHO, Jaime, Editorial Temis, S.A., Bogotá 2015, págs. 47 y 48.

domicilio del demandado, aportada por la apoderada de la parte ejecutante (sic), la Carrera 16 #6-27, int 101, de la ciudad de Medellín-Antioquia”.

Al efecto, se advierte que la dirección que se suministra en la demanda para efectos de notificaciones, es diferente al domicilio y, aunque ambas pueden confluir en un mismo municipio; es posible tener esa dirección en una localidad diferente a la del domicilio, como incluso, lo precisa la jurisprudencia al puntualizar:

(...) no pueden confundirse el domicilio y la dirección indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal. (Corte Suprema de Justicia. Auto del 13 de febrero de 2014, Rdo. 11001-02-03-000-2013-02989-00).

En este caso, la demanda indicó la dirección del demandado para realizar las notificaciones a que hubiere lugar; pero de la lectura de la demandada no se advierte que hubiera expresado cuál es su domicilio y, bajo estas circunstancias, no existen elementos para determinar la competencia por el fuero personal.

Igual vacío se advierte para determinar la competencia por el fuero contractual; basta con observar que la demanda indica

el municipio donde está ubicado el inmueble objeto de la relación arrendaticia, pero no precisa cuál es el lugar que acordaron los contratantes para el pago de los cánones de arrendamiento y si fue consignado en el contrato de arrendamiento; ahora, si los sujetos de la relación contractual omitieron acordarlo, se tiene que acudir a las normas sustantivas que regulan tal tópico y que suplen el silencio de los contratantes.

Bajo estas circunstancias si luego de examinar y estudiar la demanda, no se advierten los elementos necesarios para determinar la competencia, se tiene que inadmitir la demanda para que se corrija suministrando estos datos y, luego, adoptar la decisión que en derecho corresponda; pues de no ser así, una declaratoria de incompetencia como ocurrió en este caso, es prematura.

Lo anterior permite colegir que, como el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Itagüí, prematuramente se declaró incompetente, se le devolverá el expediente para los fines pertinentes.

A mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISION CIVIL**,

R E S U E L V E

1. Por lo dicho en la parte motiva y para los fines indicados, se ordena devolver la demandada ejecutiva al **JUZGADO DE**

PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE ITAGÜÍ (ANT.).

2. Remítase el expediente al referido juzgado, para que imprima el trámite que legalmente corresponde.

3. Ofíciase al **JUZGADO QUINCE CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**, y a la parte interesada, informando la decisión adoptada, a quienes se remitirá copia de este proveído.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
Magistrado